Bogotá D.C., 24 de julio de 2019

Honorable Representante

**CARLOS ALBERTO CUENCA CHAUX**

Presidente

Cámara de Representantes del Congreso de la Republica

Bogotá D.C.

**Asunto: Proyecto de Ley No. \_\_\_ de 2019 “Por medio del cual se modifica la Ley 1575 de 2012, se establecen normas para incentivar la actividad bomberil, y se dictan otras disposiciones”.**

Respetado Presidente,

En mi condición de Representante de la Cámara de Representantes del Congreso de la Republica radico el presente Proyecto de Ley que busca modificar la Ley 1575 de 2012, se establecen normas para incentivar la actividad bomberil, y se dictan otras disposiciones.

De tal forma, presento a consideración del Congreso de la República este proyecto para iniciar el trámite correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas por la Ley.

Adjunto original y tres (3) copias del documento, así como una copia en medio magnético (CD).

Cordialmente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA**

Representante a la Cámara

Partido Alianza Verde

**PROYECTO DE LEY NÚMERO ------ DE 2019** **CÁMARA**

**Proyecto de Ley No. \_\_\_ de 2019 “Por medio del cual se modifica la Ley 1575 de 2012, se establecen normas para financiar la actividad bomberil, y se dictan otras disposiciones”.**

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA:**

**TITULO I**

**Objeto**

1. **Objeto:** El objeto de la presente ley consiste en contribuir a la promoción y de la actividad bomberil en Colombia, así como obtener recursos para financiar los cuerpos de bomberos.

**Parágrafo**: Los ingresos y beneficios contemplados en la presente ley no le serán aplicables a los bomberos aeronáuticos según el literal c), del artículo 18, de la Ley 1575 de 2014.

**TITULO II**

**Estampilla Bomberil**

1. **Estampilla Bomberil:** La estampilla bomberil establecida en los artículos 14 y 37 de la Ley 1575 de 2012 se regirá por las siguientes disposiciones.
2. **Autorización:** Autorícese a las Asambleas departamentales para emitir una estampilla, la cual se denominará Estampilla Bomberil, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de la actividad bomberil, en cada una de sus respectivas jurisdicciones.

**Parágrafo 1o.** Los contratos laborales, contratos de aprendizaje, convenios interadministrativos, y actos sin cuantía entre entidades públicas, quedan excluidos de la presente estampilla.

**Parágrafo 2o.** Los actos gravados deben ejecutarse, realizarse o desarrollarse en la jurisdicción que está generando la estampilla.

**Parágrafo 3o.** La Estampilla Bomberil podrá establecerse sin perjuicio que en la jurisdicción también se generen otros tributos o cobros para financiar la actividad bomberil.

**Parágrafo 4º.** Facúltese a los Concejos Municipales y Distritales de cada departamento para que, previa autorización de la Asamblea del Departamento respectivo, hagan obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la presente ley.

1. **Tarifas de la estampilla:** Cada entidad territorial aplicará correspondiente tarifa conforme su autonomía territorial, y según sus necesidades e intereses.La tarifa aplicable a la Estampilla Bomberil, será mínimo el 0.5% y máximo el 1.5% del valor del acto o contrato, y se cobrará sobre actuaciones públicas y documentos públicos.
2. **Recaudo y destinación:** El valor a recaudar por concepto de esta estampilla no tendrá límite y será permanente.

El producto de dichos recursos se destinará, como mínimo, en un 70% para la financiación de las instalaciones donde funcionaran los cuerpos de bomberos, y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los mismos, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector público, sector privado y la cooperación internacional.

1. **Control de la estampilla:** Cada entidad territorial que establezca la Estampilla Bomberil en su jurisdicción, deberá presentar un informe anual a la respectiva Contraloría Territorial a que este sujeta, donde detalle el recaudo, gestión, administración y destinación de los recursos obtenidos por este concepto.

**TITULO II**

**Otras disposiciones sobre el financiamiento de la actividad bomberil**

1. **Bases gravables de los recursos territoriales para financiar la actividad bomberil:** Modifíquese el parágrafo 2, del artículo 37 de la Ley 1575 de 2014, adicionando un segundo inciso el cual quedará así:

**PARÁGRAFO 2.** Para calcular la sobretasa o recargo al impuesto predial destinado a financiar la actividad bomberil, los municipios podrán utilizar el avalúo catastral vigente en sus respetivas jurisdicciones.

De igual modo, para calcular las tasas, sobretasas o recargos sobre los demás tributos o actuaciones de los que trata este artículo, se podrán emplear las bases gravables de los tributos territoriales o el monto a pagar por los mismos, así como las cuantías de las actuaciones públicas mencionadas.

1. **Régimen Tributario de los Cuerpos de Bomberos:** Modifíquese el artículo 23 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

**ARTÍCULO 23. ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DECLARANTES.** No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral; las asociaciones y federaciones de Departamentos y de Municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, **los bomberos de Colombia**, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio.

Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar la información que considere pertinente para esos efectos.

1. **Exclusión de tributos territoriales y nacionales:** Modifíquese el artículo 30 de la Ley 1575 de 2012, el cual quedará así:

**Artículo 30.** Los inmuebles destinados a dependencias, talleres y lugares de entrenamiento de propiedad de los bomberos de Colombia, no estarán gravados con tributos territoriales.

De igual modo, no podrá gravarse con ningún tributo territorial la actividad bomberil, las actividades que desarrollen para financiarse, y cualquier pago que requieran para la celebración de contratos y/o convenios con los entes territoriales u otras entidades de carácter público o privado.

Los bomberos de Colombia, sus bienes, las actividades que desarrollen en cumplimiento de su objeto, así como las que desarrollen para su financiación, estarán excluidas del pago de tributos de orden nacional.

**TITULO III**

**Otras disposiciones**

1. **Inclusión de entidades a los Bomberos de Colombia:** Adiciónese un literal “i” y un parágrafo 4º al artículo 4 de la Ley 1575 de 2012, así:

i) Las organizaciones civiles, corporaciones, o fundaciones legalmente constituidas cuyo objeto sea la prevención, atención y en general la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.

**Parágrafo 4º.** El Ministerio del Interior o quien haga sus veces regulará el literal (i) del presente artículo, con el fin que las organizaciones civiles, corporaciones, o fundaciones legalmente constituidas mencionadas, puedan hacer parte de los Bomberos de Colombia cumpliendo los requisitos y procedimientos que se establezcan.

1. **Inclusión de entidades a la Junta Nacional de Bomberos:** Adiciónese un literal “k” y un parágrafo 2º al artículo 8 de la Ley 1575 de 2012, así:

k) Dos (2) representantes de las organizaciones civiles, corporaciones, o fundaciones legalmente constituidas a que se refiere el literal (i) del artículo 4 de la presente ley.

**Parágrafo 2º.** El Ministerio del Interior o quien haga sus veces regulará la forma de elección respecto de los miembros del literal (k) del presente artículo.

1. **Vigencia.** La presente ley rige a partir de su promulgación.

De los honorables Congresistas,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA**

Representante a la Cámara

Partido Alianza Verde

**PROYECTO DE LEY NÚMERO ------ DE 2019 CÁMARA**

**Proyecto de Ley No. \_\_\_ de 2019 “Por medio del cual se modifica la Ley 1575 de 2012, se establecen normas para financiar la actividad bomberil, y se dictan otras disposiciones”.**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.**

Con el fin de realizar la exposición de motivos del presente Proyecto de Ley, y argumentar la relevancia de aprobación del mismo, este acápite se ha divido en cinco (5) partes que presentan de forma ordenada la importancia del tema, estas son: (1) Antecedentes y justificación, (2) objetivos del proyecto de ley, (3) Descripción del proyecto, (4) fundamento jurídico, e (5) impacto fiscal.

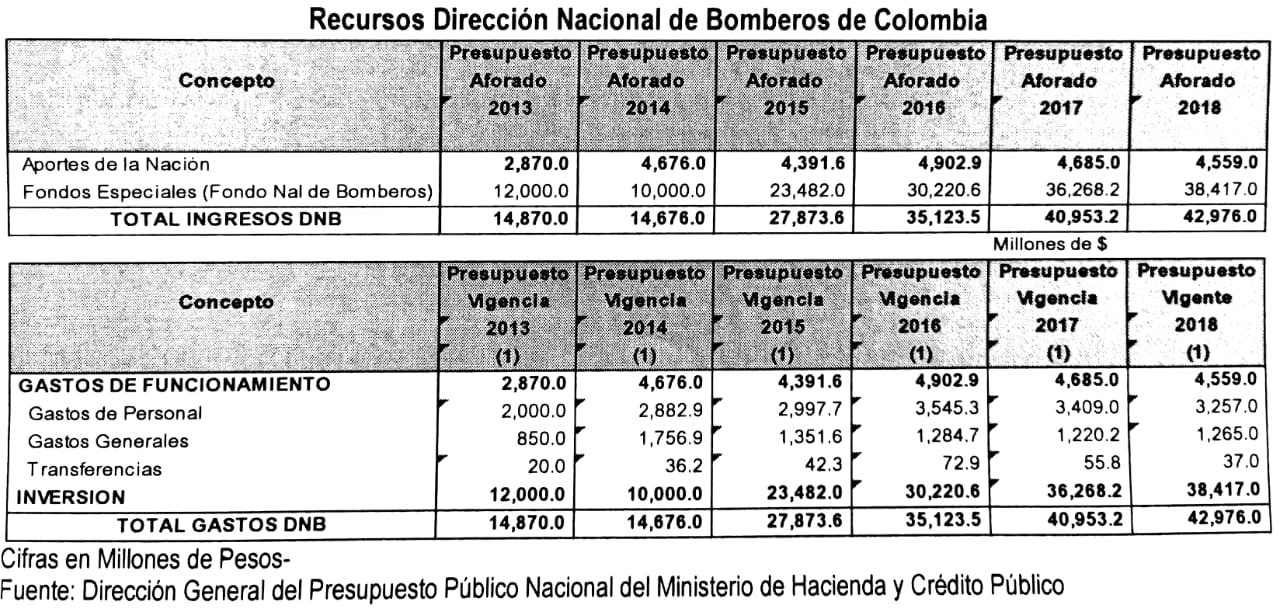
**1. Antecedentes y justificación.**

El presente Proyecto de Ley parte de la necesidad que se tiene de fortalecer financieramente la actividad bomberil en nuestro país. En este sentido, con miras a fortalecer la labor de los Bomberos de Colombia y para la creación de todos los Cuerpos de Bomberos faltantes, pues a la fecha hay varios municipios sin este servicio, así como las deficiencias que se presentan en los sitios donde ya existe el mismo, se hace imperativa una reforma a la Ley 1575 de 2012, así como crear instrumentos financieros para obtener los recursos que se necesitan para el desarrollo de esta actividad.

También debe recordarse que la razón de habitantes por bombero recomendada no se está cumpliendo (1.000 habitantes x 1 bombero), pues claramente no existen los recursos para lograr esta proporción, lo que ocasiona una incertidumbre en el sentido de no estar preparados para las eventuales emergencias que puedan presentarse y deban ser atendidas por la actividad bomberil.

Considerando lo mencionado, se denota que las medidas actuales no son suficientes para crear y mantener cuerpos de bomberos en nuestro país, y muestra de ello son las cifras sobre lo que se le asigna a este concepto en el Presupuesto General de la Nación, en virtud de las cuales puede observarse como los casi 43 mil millones de pesos asignados a estos rubros son insuficientes para los 1122 municipios que tiene nuestro país, pues una división básica daría un aproximado de 38 a 40 millones de pesos anuales por municipio, lo que es ínfimo comparado con las necesidades que se desprenden de esta actividad.

De tal modo, se presentan las cifras del Presupuesto General de la Nación destinados a este concepto en los últimos 5 años y su respectiva ejecución:





Visto lo anterior, el presente Proyecto de Ley busca dotar de recursos adicionales a los Bomberos de Colombia, así como disminuir posible gastos impositivos que puedan ocasionar, de tal forma, cabe resaltar que la exclusión de tributos de orden nacional se hace para que los Bomberos de Colombia no tengan cargas tributarias sustanciales y formales excesivas que desgasten su administración, y que en el caso de los tributos de orden territorial, se hace con esta misma lógica, pero en este caso tales rubros son compensados por la estampilla bomberil establecida en el artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 y adicionalmente con los demás recursos que se estipulan en este artículo y a los que se les busca darles mayor claridad con el presente proyecto de ley.

Por otro lado, es pertinente con el fin de respetar el derecho a la igualdad y promocionar la actividad bomberil, la inclusión dentro de la definición de “Bomberos de Colombia” del artículo 4 de la Ley 1575 de 2012, a las organizaciones civiles, corporaciones, o fundaciones legalmente constituidas cuyo objeto sea la prevención, atención y en general la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, de acuerdo a lo que reglamente el Ministerio del Interior, de tal modo se reconozca un derecho a pertenecer a dicho grupo de sujetos a los Bomberos de Colombia, pues de no ser así, se estaría excluyendo sin justificación a un grupo de personas que ayudan a prestar este servicio de actividad bomberil a la comunidad, lo que realizan hoy en día de manera autónoma, gratuita y sin ningún tipo de apoyo o acompañamiento por parte del Estado.

También debe considerarse por lo demás, que la Ley 1575 si se admite en su artículo 4 a la “Confederación de Bomberos”, **entidad de derecho privado sin ánimo de lucro**, pero no a sus confederados (asociados individuales), por lo cual se hace necesario realizar esa rectificación para no vulnerar los derechos de estos sujetos no incluidos en la ley, así como fortalecer los Bomberos de Colombia con este grupo de personas que también prestan el servicio y se dedican a la actividad bomberil.

Por último, es indispensable señalar que el 23 de octubre se remitió el presente Proyecto de Ley por medio de un correo electrónico a la Dirección Nacional de Bomberos, Confederación de Bomberos y a la Federación Nacional de Bomberos, con el fin que se pronunciaran sobre la pertinencia y observaciones en general del documento, con base en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, no obstante, solo se pronunció la Federación de Bomberos en el sentido de apoyar la iniciativa.

En este sentido, se deja constancia del asunto y así mismo se menciona que se está en total disponibilidad de oír a estas organizaciones como a cualquier otra entidad o sujeto que desee aportar a la construcción del proyecto de ley y a la solución de las problemáticas que se comentan.

Con base en lo anterior, el 11 de noviembre de 2018 se radico el proyecto de ley con número 277 de Cámara, no obstante por periodos legislativo y una congestionada agenda legislativa, la iniciativa fue archivada si discutirse, motivo por el cual se presenta de nuevo el proyecto de ley en esta ocasión, considerando varios cuestionamientos que se suscitaron desde ese lapso hasta la actualidad.

Visto lo anterior, a continuación se trazan los objetivos del Proyecto de Ley.

**2. Objetivos.**

En el presente acápite se dará cuenta de los objetivos del Proyecto de Ley para denotar sus fines.

El objetivo general del proyecto de Ley es el siguiente:

* Fortalecer la actividad bomberil en Colombia.

A través de este objetivo general se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos:

* Dotar de recursos a los Bomberos de Colombia a través de:
  + Regulando la estampilla bomberil.
  + Incluir dentro del régimen del impuesto de renta de los sujetos no contribuyentes y declarantes a los Bomberos de Colombia.
  + Excluir de tributos nacionales y territoriales a la actividad bomberil y a los cuerpos de bomberos de Colombia.
  + Destinar el cinco (5%) del recaudo del gravamen a los movimientos financieros a la actividad bomberil en Colombia.
* Incluir dentro de los Bomberos de Colombia a otras entidades que desarrollan la actividad bomberil.
* Promover la actividad bomberil en Colombia.

**3. Descripción del proyecto.**

En su primer artículo el proyecto de ley describe su objeto, el cual es la promoción de la actividad bomberil en Colombia, así como la obtención de recursos para el fortalecimiento de la misma.

Posteriormente, en los artículos 2 a 6 se regula la estampilla bomberil, de tal forma, se le da la autorización a los respectivos entes territoriales para generar este tributo en sus respectivas jurisdicciones.

Se debe mencionar que NO se está sobreregulando de la estampilla, pues la ley 1575 de 2012 solo la autorizo en sus artículos 14 y 37 sin regular ninguno de sus aspectos que es lo que se pretende hacer con la presente ley.

De igual modo, debe indicarse que los ingresos y beneficios de los que trata la presente ley no les aplican a los bomberos aeronáuticos quienes tienen una regulación diferente del ámbito privado, y considerando que los recursos se necesitan para los demás cuerpos de bomberos.

La destinación de estos recursos será para la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de la actividad bomberil. Cabe anotar que los contratos laborales, de aprendizaje, convenios interadministrativos y actos sin cuantía, quedan excluidos de este impuesto.

Sobre el tema anterior, se indica también que se especifica sobre qué materia imponible recae la estampilla, esto es las actuaciones públicas o documentos públicos. La base gravable será el monto del acto o contrato, la tarifa del tributo va a tener un rango de 0.5% a 1.5%, y no tendrá un monto especifico o límite de recaudo, por lo cual será permanente. También se especifica que cada entidad territorial dentro de su autonomía se moverá en el rango de orden legal.

Respecto de la destinación de estos recursos se señala que como mínimo el 70% irá para la financiación de las instalaciones donde funcionaran los cuerpos de bomberos, y el 30% restante a la dotación y funcionamiento de los mismos.

Finalmente, sobre este tema se estable una obligación de rendir un informe a la respectiva contraloría territorial con el fin que se indique el recaudo, gestión, administración y destinación de los recursos obtenidos por este concepto.

En una línea similar, el artículo 7 regula las bases gravables de los recursos tributarios que se establecen en el artículo 37 de la Ley 1575 de 2012, terminando de regular lo que en su momento hizo el artículo 148 de la Ley 1940 de 2018. Adicionalmente este artículo fue demandando ante la Corte Constitucional y corre bastante riesgo de ser declarado inconstitucional. (Expediente D-13119 de 2019), por encontrarse en una ley anual de presupuesto y exceder su límite temporal, por lo cual se hace necesario regularlo en una ley ordinaria previendo la inconstitucionalidad sobreviniente.

Es necesario para regular estos tributos territoriales que se crean con la ley 1575 de 2019, con esto darle claridad a las administraciones tributarias territoriales y a los contribuyentes de las mismas, pues lo que busca el actual proyecto de ley es generar transparencia fiscal sobre las normas aplicables.

Posteriormente, en el artículo 8 se crean otros mecanismos de financiación de los Bomberos de Colombia, incluyéndolos dentro del artículo 23 del Estatuto Tributario como entidades declarantes, pero no contribuyentes, con el fin que no tengan carga en el impuesto de renta, salvo presentar su respectiva declaración, pero no la obligación de pagar este impuesto.

De igual modo, se excluye de gravámenes tanto nacionales como territoriales a los Bomberos de Colombia, a la actividad bomberil, y así mismo, a las demás actividades que desarrollen para financiarse en el cumplimiento de sus funciones, lo anterior con el fin que esta labor social no se vea limitada por la carga tributaria que pueda existir.

Los Bomberos de Colombia, al no realizar actividades industriales y comerciales como objeto principal, los ingresos que obtienen por estos medios es muy reducido, y el recaudo que se obtiene de los mismos es ínfimo, por el contrario, se debe promocionar su actividad y evitar que tengan cargas desproporcionadas conforme su naturaleza jurídica.

También, se incluyen dentro de los Bomberos de Colombia en los artículos 4 y 8 de la Ley 1575 de 2012, a las organizaciones civiles, corporaciones, o fundaciones legalmente constituidas cuyo objeto sea la prevención, atención y en general la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, de acuerdo a lo que reglamente el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que hacen parte de la prestación de este servicio público, y que no existe razón para excluirlos de hacer parte de este grupo, por lo demás, debe tenerse en cuenta que en estas disposiciones se encuentra la Confederación de Bomberos, entidad jurídica de derecho privado constituida bajo las mismas condiciones, por lo cual no se haya razón a que los organismos asociados no hagan parte también de los Bomberos de Colombia.

Como un asunto de forma, el último artículo del proyecto se indica que la vigencia de la ley será a partir de su promulgación.

**4. Fundamento jurídico.**

Desde el preámbulo de la Constitución Política, pasando por los primeros artículos de la Carta Política, principalmente teniendo en cuenta el artículo 2 de este texto, donde se consagran los fines del mismo, dentro de los cuales está la protección de la vida, y se indica:

“**ARTICULO****2.**Son fines esenciales del Estado: **servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución**; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

**Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,** honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”(Resaltado fuera de texto).

De tal modo, es imperativo que el Estado efectivamente garantice la vida e integridad de las personas, para lo cual es necesario estar preparado en asuntos relacionados con riesgos y desastres, y este especifico caso de los incendios y aquellas actividades en las cuales los Bomberos de Colombia ejercen su acción y prestan sus servicios.

En tal medida, la actividad bomberil es necesaria, pero solo puede ser suficiente si cuenta con los recursos idóneos para su efectivo funcionamiento, por lo cual hay que dotarlos de un capital adecuado, y es precisamente lo que hace el proyecto de ley.

Así, asegurar un buen financiamiento de los cuerpos de bomberos, es asegurar la protección contra varios tipos de riesgo que son combatidos principalmente por la actividad bomberil, lo que a su vez es una garantía de la protección de la vida, salud e integridad de las personas y sociedad en general.

Por su parte, se debe recordar el artículo 13 de la Constitución Política en el sentido de darle un trato igualitario a la Confederación Nacional de Bomberos y a sus asociados, para lo cual se tiene en cuenta la norma citada:

“**ARTICULO 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”

Por otro lado, debe recordarse que no se está vulnerando la Constitución Política al establecer una exclusión de los tributos de orden nacional y territorial, pues en los articulo 154 y 294 de la *norma normarum* hablan de exenciones (beneficios de los tributos existentes), y lo que se está haciendo en este caso es una delimitación negativa de los respectivos tributos.

“**ARTICULO 154.**Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo [156](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#156), o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.

No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo [150](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#150); las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

**ARTICULO 294.**La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo [317](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html#317).”

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional ha sido clara en que la delimitación y configuración legislativa en lo referente al tema impositivo es amplia, y no se puede quitar esta facultad al Congreso de la Republica, adicionalmente es sustancialmente diferente una exención a una exclusión, pues en la primera se aminora o anula el efecto del tributo, mientras que en la segunda se realiza una delimitación negativa del hecho generador, lo que impide que el tributo surja, por lo cual no podría concederse ningún trato favorable sobre una exacción inexistente.

La Corte Constitucional se pronunció sobre el tema cuando declaró exequible los artículos 231 de la Ley 685 de 2001 (código de minas) por medio de la sentencia C-229 de 2003, y el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 (estatuto de registro de instrumentos públicos) por medio de la sentencia C-260 de 2015. Las disposiciones indicaban lo siguiente:

“**ARTÍCULO 231. PROHIBICIÓN**. La exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se necesiten para dichas actividades y para su acopio y beneficio, **no podrán ser gravados con impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos**.

**ARTÍCULO 15. RADICACIÓN DE DOCUMENTO O TÍTULO VÍA ELECTRÓNICA EN LAS NOTARÍAS, DESPACHOS JUDICIALES O ENTIDADES ESTATALES.** Una vez otorgado un título o documento de los relacionados en el artículo 4o, el Notario, la autoridad judicial, administrativa o estatal competente, a petición de cualquiera de los interesados o de manera oficiosa, podrá radicarlo en el sistema de información de registro o sistema adoptado para tal fin, remitiendo vía electrónica a la oficina de registro la copia del documento o título digitalizado con firma digital, así como los soportes documentales del cumplimiento del pago de los impuestos y derechos establecidos en la ley y decretos reglamentarios.

**PARÁGRAFO 1o.** El pago de los impuestos y derechos de registro se podrá efectuar a través de medios virtuales o electrónicos bajo condiciones de seguridad y confiabilidad, debidamente integrados al proceso de registro. La Superintendencia de Notariado y Registro, reglamentará el procedimiento y desarrollo tecnológico para la puesta en marcha de este servicio.

**PARÁGRAFO 2o. Ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen.**”

(Resaltado fuera de texto)

Sobre el asunto, la Corte menciona en sentencia C-260 de 2015 lo que se cita en seguida:

Por esa razón, conforme a lo dispuesto en los artículos 152, numeral 12, y 338 de la Constitución, el Congreso de la República tiene la competencia constitucional para crear tributos, así como la de modificarlos, aumentarlos, disminuirlos, suprimirlos, o establecer supuestos de no sujeción. La norma que ha sido objeto de reproche constitucional, estableció una prohibición que naturalistamente no entraña una exención o una exoneración en materia de tributos endógenos de propiedad de las entidades territoriales, en los términos en los que ha quedado expuesto en esta providencia. La norma demandada estableció que los actos notariales y de registro, entendidos como hechos voluntarios que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, no son supuestos de sujeción tributaria territorial, es decir, no pueden ser hechos generadores de tributos que sean de propiedad de los departamentos y municipios. En efecto, encuentra la Sala que el Legislador, en uso autorizado de sus competencias constitucionales, estableció un supuesto de no sujeción del tributo, puesto que los actos notariales y de registro no causarán carga impositiva de naturaleza departamental o municipal. Nótese que aquí dichos actos notariales y registrales no constituyen un hecho generador de tributos departamentales o municipales, es decir, no nace a la vida jurídica la relación tributaria. Esta actuación no desconoce el artículo 294 de la Constitución por las siguientes razones: i) **la norma demandada no establece una exención o beneficio tributario en impuestos de propiedad de los entes territoriales, razón por la cual el Legislador no excedió sus competencias constitucionales**; ii) la disposición no afecta tributos específicos de los departamentos y municipios, como sería el de industria y comercio que deben pagar los notarios; y iii**) lo que hace la norma censurada es establecer que ningún acto notarial ni de registro, sean supuestos de sujeción, es decir, no pueden ser hechos generadores de carga impositiva de propiedad de las entidades territoriales, situación que difiere del concepto de exención o beneficio, expuesto líneas atrás. Por estas razones, la Corte considera que la disposición acusada es constitucional y declarará su exequibilidad.** (Resaltado fuera de texto).

Por otro lado, referente a las estampillas, debe recordarse que la Constitución Política Prohíbe que haya rentas nacionales con destinación específica, sin embargo, establece unas excepciones, dentro de las cuales se enmarca las destinadas a inversión social. En tal modo, dado que la actividad bomberil es un servicio público a cargo del Estado y que busca salvaguardar la vida, salud e integridad de las personas, es perfectamente posible que la destinación directa del gravamen a los movimientos financieros que se plantea sea dirigida al objeto de esta ley. La norma constitucional señala:

**ARTICULO 359.** No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan:

1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y municipios.

**2. Las destinadas para inversión social.**

3. Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías.

Adicionalmente, en lo referente a los artículos de índole tributario y la creación de la estampilla bomberil, encontramos el artículo 95-9 en donde se indica que uno de los deberes de los ciudadanos es contribuir a los gastos del Estado, y por otro lado el articulo 338 donde se consagra el principio de legalidad tributaria e indica que los tributos de orden deben tener establecidos en la ley todos los elementos del impuesto, tal como se realiza en el presente proyecto de ley.

“**ARTICULO 95.**La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”

“**ARTICULO 338.** En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. (…)”

En este sentido, una vez creados los elementos del tributo de orden territorial, y autorizar a las entidades territoriales para su empleo dentro de los márgenes establecidos, es posible que en cada jurisdicción y de forma autónoma se establezca este gravamen, adoptándolo por medio la respectiva ordenanza departamental, donde adicionalmente se complementaran los elementos faltantes de la exacción, iniciando su cobro y administración.

Visto lo anterior, el Proyecto de Ley cuenta con un sustento jurídico que permite que pueda ser debatido al interior del Congreso de la Republica, y posteriormente no tenga vicios de ningún tipo cuando la ley sea promulgada.

**5. Impacto fiscal.**

De conformidad con lo presentado, pero específicamente con el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión a que haya lugar.

Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la obligación del Estado de preservar la vida y asegurar la calidad de vida de las personas, previniendo los riesgos desastres, y por lo demás asegurando la calidad del servicio y realización de la actividad bomberil, es relevante mencionar que una vez promulgada la Ley, el Gobierno deberá promover su ejercicio y cumplimiento, además se debe tener en cuenta como sustento un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en la Sentencia C-911 de 2007, en la cual se puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice y barrera, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa:

En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Finalmente, al respecto del impacto fiscal que los proyectos de ley pudieran generar, la Corte ha dicho:

“Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas. El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo; y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el Gobierno. (…). El artículo 7º de la Ley819/03 no puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo.

Como lo ha resaltado la Corte, si bien compete a los miembros del Congreso la responsabilidad de estimar y tomar en cuenta el esfuerzo fiscal que el proyecto bajo estudio puede implicar para el erario público, es claro que es el Poder Ejecutivo, y al interior de aquél el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el que dispone de los elementos técnicos necesarios para valorar correctamente ese impacto, y a partir de ello, llegado el caso, demostrar a los miembros del órgano legislativo la inviabilidad financiera de la propuesta que se estudia.

Finalmente, se debe tener en cuenta que el proyecto de ley no representa esfuerzo fiscal significativo del Gobierno, pues los Bomberos de Colombia y la actividad bomberil no representan sumas significativas de recaudo, por el contrario, su promoción puede redondear en mayores beneficios para el Estado y la sociedad.

Por todo lo expresado anteriormente, ponemos a consideración del Congreso de la República el presente proyecto, esperando contar con su aprobación.

De los honorables Congresistas,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LEÓN FREDY MUÑOZ LOPERA**

Representante a la Cámara

Partido Alianza Verde